

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio No. 1433

Radicación	76111333300120210026500
Medio de Control	EJECUTIVO
Demandante(s)	YOLANDA ORTEGA PANESSO
Mail	rosaangelicadelgado16@gmail.com
Demandado(s)	MUNICIPIO DE RESTREPO (V)
Mail	juridica@restrepovalle.gov.co

Guadalajara de Buga (V), 11 de Noviembre de dos mil veintidós (2022).

Procede el Despacho a resolver sobre la viabilidad de ordenar seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones cuyo pago se pretende obtener mediante el presente proceso Ejecutivo.

Antecedentes

El Título(s) ejecutivo que contiene la obligación cuyo pago se pretende, es el establecido en el numeral 1° del Artículo 297 del CPACA, providencia consistente en: Sentencia de Primera Instancia No. 002 del 01 de Febrero de 2019, proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento, en el que resultó condenado el Municipio de Restrepo (V).

La providencia allegada como base de recaudo, contiene la(s) siguiente(s) condena(s): “*A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al MUNICIPIO DE RESTREPO (V), liquidar y cancelar a la señora YOLANDA ORTEGA PANESSO las correspondientes prestaciones sociales por el periodo laborado desde el 12 de Mayo de 2012 hasta el 30 de Noviembre de 2014, por cuanto operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás tiempos; Cancelar los salarios por los periodos que la demandante estuvo sin contrato dentro del laso comprendido entre el 12 de Mayo de 2012 al 30 de Noviembre de 2014 por cuanto operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás tiempos; Tomar durante el tiempo comprendido entre el 09 de enero de 2001 hasta el 30 de Noviembre de 2014, sin interrupciones, el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador; y devolver los*

dineros cancelados por la demandante en razón a la cuota parte legal que la entidad demandada no trasladó al correspondiente fondo de pensiones y empresa prestadora de salud durante el tiempo transcurrido entre el 12 de Mayo de 2012 hasta la finalización de su último contrato.”

Como fundamento de sus pretensiones, señala la parte Ejecutante que la entidad ejecutada no ha dado cumplimiento a la orden impartida en el fallo cuya parte resolutive fue transcrita. Por lo que, al tenor de lo establecido en el Numeral 1 del Artículo 297 del CPACA¹, los documentos adosados a la solicitud de mandamiento de pago en esta instancia constituyen título ejecutivo, en anuencia de lo dispuesto en el Artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del Artículo 299 del CPACA.

El Mandamiento de Pago y Sus Efectos

Al reunir la demanda los requisitos pertinentes y haberse acompañado el título ejecutivo base de la ejecución (Sentencia de Proceso Ordinario debidamente ejecutoriada), el Juzgado libra mandamiento de pago en contra del Municipio de Restrepo (V), decisión que quedó contenida en el Auto Interlocutorio No. 172 del 25 de Febrero de 2022, en los siguientes términos:

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO a favor del (la) señor(a) YOLANDA ORTEGA PANESSO, y en contra del MUNICIPIO DE RESTREPO, por la(s) siguiente(s) suma(s) de dinero:

1.1.- CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$52.675.911), más los intereses moratorios, por concepto de prestaciones sociales.

1.2.- TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$35.283.456), por concepto de salarios adeudados de los periodos que la demandante estuvo sin contrato dentro del lapso comprendido entre el 12 de mayo de 2012 y el 30 de noviembre de 2014, y la respectiva indexación de las sumas con base en el IPC.

1.3.- SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$65.080.039), por concepto de aportes a cotizar en fondo de pensiones, que deben ser cotizados al respectivo fondo de pensiones, ajustándose de acuerdo con el cálculo actuarial realizado por el fondo de pensiones.”

Las notificaciones ordenadas en dicho auto, se surtieron mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales, según consta en la

¹ ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: 1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)

constancia de envío emitida por el iniciador, que se encuentra incorporada al expediente virtual en PDF denominado “14NotificaPersonalMandamientoPago”, concediéndose el termino para que se realizara el pago o presentara excepciones de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del CGP, cuyo computo inició a partir del vencimiento del segundo día siguiente al envío del mensaje, guardándose absoluto silencio, no haciendo uso de la facultad de contestar la demanda.

Así las cosas, pasa a Despacho el proceso para decidir lo que en derecho corresponda, y al no hallarse causal de nulidad que invalide lo actuado, a ello se procede teniendo en cuenta las siguientes;

CONSIDERACIONES

De las Facultades del Juez de la Ejecución

Las normas de procedimiento son de orden público y no pueden ser desconocidas o violadas, ni por las partes, ni por el juez, pues en ello va involucrado el Derecho Constitucional del Debido Proceso, que aparece instituido en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, conforme al cual el proceso se debe surtir ante juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Tratándose de procesos ejecutivos, debe presentarse demanda ajustada a la ley, acompañada del documento que preste mérito ejecutivo. En tal caso, el Juez librará el respectivo mandamiento, ordenándole al Demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal (Artículo 430 del Código General del Proceso).

Al respecto ha considerado el Consejo de Estado, en relación con los procesos ejecutivos, cuyo título es una sentencia²:

“EL PROCESO EJECUTIVO

En anteriores oportunidades³, ha dicho esta Corporación que el proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho que tiene el demandante de reclamar del ejecutado el cumplimiento de una obligación clara expresa y exigible, motivo por el cual para iniciar una ejecución es necesario entrar a revisar el fundamento de la misma, esto es el título ejecutivo.

² SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION “A”. Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, Auto de veintisiete (27) de mayo de dos mil diez (2010) Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00435-01(2596-07) Actor: HERMINIA ISABEL BITAR DE MONTES; SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, auto de veintinueve (29) de abril de dos mil diez (2010) Radicación No: 13001233100020060134501(1352-09) Actor: NOLBERTO GUTIERREZ FLOREZ

³ Auto de 24 de enero de 2007 Rad.31825 M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

El artículo 488 del C.P.C. establece las condiciones formales y de fondo que debe reunir un documento para que de él pueda predicarse la existencia de título ejecutivo.

Las condiciones formales buscan que los documentos que integran el título conformen unidad jurídica, que sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme. ***Las condiciones de fondo***, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean liquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.

Concretamente, la sentencia de condena constituye un verdadero título ejecutivo, en tanto que contiene una obligación clara, expresa y exigible en virtud de un pronunciamiento judicial con efectos de cosa juzgada.” (Negrilla del Despacho)

Así mismo, en reciente providencia de la Sección Cuarta de esa Corporación sobre los títulos ejecutivos se señaló⁴:

“En materia de lo contencioso administrativo, el proceso ejecutivo sirve para pedir el cumplimiento forzado de las obligaciones a cargo de las entidades públicas que consten, por ejemplo, en los actos administrativos ejecutoriados o en las providencias judiciales⁵.

Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. En el último caso, la acción ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida.

⁴ SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS, auto de treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00089-01(18057) Actor: BANCO DAVIVIENDA S.A.

⁵ Así, por ejemplo, el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, que empezó a regir el 2 de julio de 2012, señala que son títulos ejecutivos los siguientes:

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.”

En cuanto a los procesos ejecutivos iniciados con base en providencias judiciales, es importante traer a colación, por lo pertinente, el auto de la Sección Tercera de esta Corporación del 27 de mayo de 1998, que dijo⁶:

“... con respecto a los procesos de ejecución en los cuales el título correspondiente se integra con la decisión o decisiones judiciales y con el acto administrativo de cumplimiento, se pueden presentar estas situaciones: primero, que el título de ejecución lo integren la sentencia y el acto de cumplimiento ceñido rigurosamente a la decisión judicial, en cuyo caso ninguna duda cabe sobre su mérito ejecutivo; segundo, que el título aducido se componga de la providencia judicial y del acto administrativo no satisfactorio de la decisión del Juez, evento en el cual el título también presta mérito de ejecución; tercero, que el título lo integren la sentencia condenatoria y el acto de cumplimiento que se aparta parcialmente de la obligación allí contenida, en cuyo caso también presta mérito ejecutivo, y cuarto, bien podría suceder que el título lo integren la sentencia de condena y el acto de cumplimiento, pero que éste desborde o exceda la obligación señalada en el fallo, en cuyo caso el Juez tendría facultad para ordenar el mandamiento ejecutivo, solamente, desde luego, hasta el límite obligacional impuesto en la sentencia.

Se deduce de lo anterior que en materia de títulos complejos integrados por la sentencia y el respectivo acto de cumplimiento, el juzgador conserva poder de interpretación del título en orden a librar el mandamiento de pago con estricta sujeción a la sentencia, todo ello para favorecer el principio de la salvaguarda del interés general y de la cosa juzgada.

En el caso examinado, entonces, la decisión judicial acompañada del acto de cumplimiento acorde con la sentencia, presta mérito ejecutivo. No podía ser de otra manera, porque la idea de que los actos administrativos de ejecución o cumplimiento de fallos judiciales vuelvan a ser demandados ante esta jurisdicción por violar o incumplir los fallos que dicen cumplir, como lo sugiere el a quo, genera un círculo vicioso, irrazonable por lo mismo, y francamente atentatorio de la cosa juzgada, y de la eficacia de la justicia. Excepcionalmente se podrían admitir acciones de nulidad contra esos actos, si diciendo cumplir el fallo, crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas no relacionadas o independientes del fallo, pues en tal caso se estaría frente a un nuevo acto administrativo, y no frente a uno de mera ejecución de sentencias.”

Como se ve, los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sea una providencia judicial pueden iniciarse porque la entidad pública no acató la decisión judicial o lo hizo, pero de manera parcial o porque se excedió en la obligación impuesta en la providencia.

En ese panorama, al juez que conoce del proceso ejecutivo le corresponderá, primero, verificar si existe título ejecutivo y si está debidamente integrado. Luego, deberá examinar si el título contiene una obligación clara expresa y exigible a cargo de una entidad pública y si la obligación consiste en una prestación de dar, hacer o no hacer.

⁶ M.P. Germán Rodríguez Villamizar, demandante sociedad Hecol Ltda., demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

En otras palabras: el juez tiene plena facultad para examinar no sólo los requisitos formales, sino las exigencias que están relacionadas con las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del título ejecutivo (requisitos sustanciales). El ejercicio de esa facultad cobra mayor importancia cuando se trata de un título ejecutivo complejo, por cuanto el juez debe revisar cada uno de los documentos que lo conforman para determinar si la parte ejecutada incumplió la obligación.”

Del Caso Concreto

Se ejercita en este Proceso una acción ejecutiva, que tiene por finalidad procurar al titular del derecho subjetivo la satisfacción de la prestación no cumplida voluntaria y extrajudicialmente por el deudor.

Respecto de los títulos ejecutivos, el Artículo 422 del Código General del Proceso, determina que éstos tienen virtualidad legal de contener una obligación clara, expresa y exigible. **Clara**, en el sentido que no haya duda sobre el monto de la obligación; **expresa**, o sea que esté allí consignada y **exigible**, que no penda ningún término o condición.

Requisitos anteriores que se cumplen dentro del presente asunto, pues la Sentencia aportada como base de recaudo ejecutivo, se constituye en un título **expreso**, determinado y especificado en un documento que es la misma sentencia; es **claro**, pues los elementos que la integran se encuentran inequívocamente señalados: por un lado, el acreedor (YOLANDA ORTEGA PANESSO), por otro el deudor (el Municipio de Restrepo (V)), a cargo de quien se encuentra la obligación de cancelar las sumas indicadas en la sentencia, y el objeto (sentencia condenatoria); y es **exigible**.

Así mismo, dentro del plenario se dan los presupuestos procesales, entendidos éstos como los requisitos exigidos por el legislador para la formación regular y el perfecto desarrollo del proceso, ya que el juez es competente para conocer y decidir esta clase de asuntos⁷.

Los extremos, tanto demandante, como demandado, tienen capacidad para ser parte, pues son sujetos de derechos y obligaciones, además el demandado se encuentra debidamente notificado, así como la demandante se encuentra debidamente representada a través de apoderada judicial. Finalmente, no se observa nulidad alguna dentro de este en trabamiento litigioso ya que cumple con los requisitos impuestos por la ley procesal.

De igual forma, es importante resaltar, que la entidad demandada no hizo uso de su facultad de defensa al no contestar la demanda.

⁷ Núm. 1 Art. 297 CPACA

Atendiendo lo anterior y al tenor de lo expresado por la normativa aplicable en este estado del proceso (Artículo 440 Código General del Proceso), en eventos como en el sub-lite, que no se proponen excepciones contra el título ejecutivo contenido en la sentencia, de las enlistadas en el numeral 2° del Artículo 442 ibídem, lo procedente es seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago, mediante auto.

Por otro lado, es importante resaltar que, el pago realizado por el Municipio de Restrepo (V) el 18 de agosto del año 2022, corresponde a los conceptos de: i) “... *salarios y prestaciones sociales dejados de devengar...*”; y ii) “... *intereses moratorios, causados desde la fecha de vencimiento de la sentencia hasta la fecha de pago de esta.*”, tal y como quedó consignado dentro de la parte resolutive del acto de cumplimiento, contenido en la Resolución No. 169 del 22 de julio de 2022, que se encuentra incorporada al expediente virtual en PDF distinguido con el consecutivo 27, dejando excluido el ítem alusivo al monto ordenado en el mandamiento de pago correspondiente a los aportes a cotizar en el fondo de pensiones. Así mismo, se denota una diferencia entre los valores pretendidos por la ejecutante y los reconocidos por el ente territorial ejecutado.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que los efectos de la sentencia que sirve de base de recaudo ejecutivo no se encuentran satisfechos en su totalidad, por lo que la suma pagada debe ser aplicada a la obligación a cargo de la Ejecutada, para efectos de establecer el monto del saldo insoluto de la obligación, sin que hubiese sido desvirtuada la falta de pago.

De conformidad con lo expuesto, se dispondrá en la forma y términos establecidos en el Inciso 2° del Artículo 440 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del Artículo 299 del CPACA, seguir adelante la presente ejecución en contra del Municipio de Restrepo (V), para obtener el cumplimiento de la obligación contenida en el título ejecutivo, esto es, el pago del saldo insoluto de los valores establecidos en el respectivo mandamiento de pago, luego de que se impute el pago parcial efectuado a la obligación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1653 del Código Civil, esto es, abonándose primeramente a los intereses.

De la Condena en Costas

En el Artículo 361 del CGP se señala que las costas están conformadas por las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

Por su parte, el Artículo 365 del CGP, contiene las reglas que deberán ser atendidas al momento de decidir sobre la condena en costas, es así como en su

numeral 1° se señala que: *“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto”*.

Y en el numeral 8° ibídem., se indica que: *“Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”*.

Evidentemente, dentro del presente proceso, no aparecen acreditadas las expensas y gastos sufragados durante el curso del mismo, por eso no habrá lugar a ningún reconocimiento al respecto.

Pero el Despacho ordenará, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 366 del CGP, se liquiden las Agencias en Derecho, inmediatamente quede ejecutoriada esta providencia, toda vez que la entidad demandada ha dado a lugar a que se le impetre la presente demanda.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero del Circuito Administrativo de Guadalajara de Buga Valle,

RESUELVE

PRIMERO: SEGUIR adelante la ejecución a cargo del Municipio de Restrepo (V), por el saldo insoluto de la obligación surgida a raíz de la condena impuesta en la Sentencia de Primera Instancia No. 002 del 01 de Febrero de 2019, consistente en el pago de las acreencias laborales surgidas con ocasión de la declaración de la existencia de una relación laboral en favor de la Ejecutante, durante el tiempo que prestó sus servicios en la entidad territorial mediante contrato de prestación de servicios, celebrados entre el 09 de enero de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2014, más los intereses determinados en el mandamiento de pago.

SEGUNDO: IMPUTAR al momento de practicar la liquidación del crédito que se cobra en el presente proceso, el pago efectuado por la entidad Ejecutada el día 18 de agosto de 2022, en acatamiento de lo dispuesto en su Resolución No. 169 del 22 de julio de 2022, equivalente a las sumas de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 35.427.358.00), como capital, y VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE. (\$ 21.404.000.00), por concepto de intereses moratorios, en la forma establecida en el Artículo 1653 del Código Civil.

TERCERO: DECRETAR el avalúo de conformidad con el Artículo 444 del Código General del Proceso y el posterior remate de los bienes que se llegaren a embargar y secuestrar en este proceso, para que con su producto se pague el crédito insoluto que se cobra.

CUARTO: ORDENAR que el demandante y/o la entidad demandada presenten la liquidación del crédito en los términos del Artículo 446 del CGP, aplicable por remisión del Artículo 299 del CPACA, teniendo en cuenta los parámetros dispuestos dentro del referido mandamiento de pago.

QUINTO: CONDENAR en costas a la entidad demandada. Una vez ejecutoriada la presente providencia, liquídense por concepto de costas las Agencias en Derecho, por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFIQUESE

Firmado Por:

Laura Cristina Tabares Gil

Juez

Juzgado Administrativo

001

Guadalajara De Buga - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 4096e22becf157a9337f005426efa0f029d47cbd0a1022579fbce67eac0e6acc

Documento generado en 11/11/2022 05:06:07 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>